



H. Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

MODIFICACIONES DE COMPATIBILIDAD DE POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO I

MODIFICACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE PERMANENCIA DE LA PENSIÓN DE MADRE DE SIETE HIJOS LEY N° 23.746

Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 2° de la Ley N° 23.746 por el siguiente:

“ARTÍCULO 2° — Para obtener los beneficios establecidos en el artículo anterior se deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) No encontrarse amparado por régimen de previsión o retiro alguno.
- b) No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante y grupo conviviente.
- c) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros deberán tener una residencia mínima y continua de quince años en el país. En ambos casos la ausencia definitiva del país hará perder el beneficio.

Una vez obtenido el beneficio, la constatación de bienes, ingresos o recursos a los que refiere el inciso b) no será causal para la suspensión o extinción del mismo.”

Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 3° de la Ley N° 23.746 por el siguiente:

“ARTÍCULO 3° — En caso de fallecimiento de la beneficiaria, tendrán derecho a la pensión:

- a) El viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante a la fecha de su deceso, en concurrencia con los hijos e hijas menores de 18 años de edad o mayores de dicha edad si fueren discapacitados.
- b) Los hijos de ambos sexos en las condiciones del inciso anterior.

El sucesor del derecho deberá acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el inciso b) del artículo 2° para la percepción del beneficio.”



H. Cámara de Diputados de la Nación

CAPÍTULO II

MODIFICACIÓN SOBRE ACCESO A LOS PLANES Y PROGRAMAS ENMARCADOS EN LA LEY N° 27.519 DE EMERGENCIA ALIMENTARIA NACIONAL

Artículo 3°.- Dispónese que los y las beneficiarios de planes y programas nacionales de carácter alimentario enmarcados en la Ley N° 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional, que en el transcurso del año 2021 accedan al mercado formal de empleo, podrán seguir percibiendo los beneficios de dichos programas, por el término de un (1) año. Dicho plazo deberá ser contado desde la fecha en que se registre la relación laboral.

Artículo 4°.- Establécese que durante la vigencia de la ley N° 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional el empleo rural registrado será compatible con los programas nacionales, actuales o futuros de protección integral a los sectores vulnerables.

El Poder Ejecutivo confeccionará, en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde la sanción de la presente, el listado de programas que resultan compatibles.

Artículo 5°.- De forma.

**Maximiliano Ferraro
Juan Manuel López
Marcela Campagnoli
Hector Flores
Mariana Zuvic
Monica Frade
Lucila Lehmann
Rubén Manzi
Paula Oliveto
Alicia Terada
Mariana Stilman
Carolina Castest
Javier Campos
Leonor Martinez Villada**



H. Cámara de Diputados de la Nación

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En medio de la actual crisis social y económica que está atravesando nuestro país, con una pobreza que alcanza al 42% de la población y en particular al 57,7% de los menores de 14 años, muchas familias siguen apostando por la inserción en el mercado de trabajo formal. Sin embargo, el actual diseño de las políticas sociales las ubica ante el dilema de acceder a un empleo formal y perder beneficios por asignaciones sociales, o mantenerse en la informalidad.

Este efecto conocido como “la trampa de la informalidad”, refiere a la competencia que puede presentarse entre la percepción de ingresos recibidos por políticas sociales y la posibilidad de generación de ingresos genuinos, por ejemplo a través de la entrada al mercado de empleo formal. Elisa Carrió y esta fuerza política, como propulsoras del Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI), hemos sostenido y propiciado políticas para que esto no ocurra.

Durante los últimos años, se han realizado importantes avances: se ha unificado el valor de las asignaciones según escalas de ingresos, y se ha implementado el traspaso automático de Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) a Asignaciones Familiares (AAFF), o viceversa, para que no exista un tiempo en el que el niño, niña o adolescente pierda el derecho a este ingreso. Lo mismo ha ocurrido con las personas que trabajan en el servicio doméstico que no tienen tope de ingresos al ser incorporadas al trabajo formal, pudiendo mantener siempre el acceso a la AUH.

Sin embargo, en la actualidad y en el marco de la pandemia que nos atraviesa, están surgiendo algunas situaciones que deberían ser observadas y revertidas a fin de garantizar que las personas puedan mantener determinadas prestaciones, aun accediendo al mercado formal de empleo.

Uno de los casos que se presentan es la pensión de madres de 7 hijos. Esta pensión, creada en el año 1989, mediante Ley N° 23.746, establece el derecho de las madres que tuviesen siete o más hijos/as, cualquiera fuese la edad y estado civil, a percibir una pensión de carácter mensual, inembargable y vitalicia, cuyo monto será el equivalente al de una pensión mínima.

Dentro de los requisitos necesarios para poder ser beneficiaria de la misma, la norma establece que la mujer no debe estar amparada por ningún régimen de previsión o retiro, ni debe contar con bienes o recursos que permitan su subsistencia, debiendo ser la



H. Cámara de Diputados de la Nación

titular argentina o naturalizada. En el caso de extranjeros, deberán contar con una residencia mínima y continuada de quince años.

Si bien la ley no establece un tope de ingresos, la reglamentación determina que “los ingresos familiares no podrán superar el importe de dos (2) dos haberes previsionales mínimos”. De esta manera, considerando que actualmente el haber mínimo se sitúa en \$20.571,44, el grupo familiar no debe contar con ingresos brutos superiores a \$41.142,88 para poder acceder al beneficio.

Considerando la actual situación económica y la fuerte inflación que se ha venido experimentando en los últimos años, dicha restricción de ingresos se ha convertido en un incentivo contrario a la incorporación de las personas al mercado formal de empleo. Debido a esta situación, entendemos que resulta prioritario que desde el Estado se articulen las medidas necesarias a fin de garantizar las condiciones para que las mujeres, que lo requieran y necesiten, puedan permanecer en la pensión, aún en el caso que hayan visto aumentar sus ingresos por haber sido incorporadas al mercado formal de empleo.

La pensión genera un piso de ingresos para el desarrollo integral de aquellas mujeres que, en situación de vulnerabilidad social, probablemente debieron dedicar gran parte de su vida al cuidado de sus hijos e hijas, provocando una enorme incertidumbre la posibilidad de perderla y condicionando sus posibilidades de progreso en la búsqueda de mejores ingresos en el mercado de trabajo formal. Por este motivo proponemos, más allá de los actuales requisitos de acceso a la misma, hacer una distinción entre ellos y las condiciones de permanencia, resultando necesario modificar la actual incompatibilidad hoy establecida en esta última. Así es que en el proyecto, sugerimos incorporar a la Ley 23.746 que, una vez que la mujer cumplió con los requisitos establecidos para obtener el beneficio, la constatación de bienes, ingresos o recursos que superen el mencionado límite no puedan implicar una suspensión o cese del beneficio.

Por otra parte, este proyecto pretende establecer que los y las titulares de la Tarjeta Alimentar, u otros programas actuales o futuros que se enmarquen en la vigencia de la Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogadas por este Congreso a través de la Ley N° 27.519, que pasen a ser formalizados/as, no pierdan el derecho a seguir recibiendo la prestación por al menos el término de un año. Esto intenta propiciar que las personas puedan insertarse en el mercado formal de empleo sin temor a perder los beneficios del programa de ayuda alimentaria, a la vez que se propicia una acción positiva del Estado para fortalecer el mercado de empleo formal.

En este mismo sentido, entendemos que en el contexto de emergencia social y económico actual, debemos generar un incentivo a que aquellas personas que puedan acceder a un empleo registrado rural temporario lo hagan sin temor a perder los beneficios derivados de programas sociales creados en el marco de la emergencia prorrogada por Ley N°



H. Cámara de Diputados de la Nación

27.519. Por eso se establece que estos trabajadores no perderán dichos beneficios durante la vigencia de esta ley.

Creemos necesario generar las señales para que el trabajo formal sea la mejor elección que una familia pueda tomar, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre. En este sentido, no resulta ajeno el hecho de que la formalidad implica una protección para el trabajador y su familia que no sólo son deseables sino que son necesarias en el contexto actual. Para ello, es fundamental que las políticas sociales y las de empleo sean abordadas integralmente para no generar como consecuencia no deseada trampas de pobreza e informalidad.

Esperamos que estas medidas propuestas puedan ser revisadas a fin de consolidar las bases de prosperidad que nuestro país requiere para salir adelante en este contexto tan difícil y adverso que nos toca vivir como nación.

Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento de mis pares y la aprobación del presente proyecto de ley.

Maximiliano Ferraro
Juan Manuel López
Marcela Campagnoli
Hector Flores
Mariana Zuvic
Monica Frade
Lucila Lehmann
Rubén Manzi
Paula Oliveto
Alicia Terada
Mariana Stilman
Carolina Castets
Javier Campos
Leonor Martinez Villada